

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES DETERMINA SOMETER A CONSULTA PÚBLICA LOS TRÁMITES CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLES ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE LOS MISMOS

ANTECEDENTES

- I. El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo, el "DOF") el *"Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones"*, mediante el cual se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, el "Instituto"), como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, además de ser la autoridad en materia de competencia económica en los sectores de los servicios antes aludidos.
- II. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el DOF el *"Decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal"* por virtud del cual se emite la *Ley Federal de Competencia Económica* (en lo sucesivo, la "Ley de Competencia"), mismo que, en términos de lo dispuesto en su artículo Primero Transitorio entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el 24 de mayo de 2014 y el cual señala en su artículo 5 que el Instituto será la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, la "Constitución") y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica.
- III. El 14 de julio de 2014, fue publicado en el DOF el *"Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión"*, el cual, en términos de lo dispuesto por su artículo Primero Transitorio, entró en vigor a los 30 (treinta) días naturales siguientes a su publicación en el DOF, esto es el 13 de agosto de 2014.
- IV. El 4 de septiembre de 2014, se publicó en el DOF el *"Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones"* (en lo sucesivo, el "Estatuto"), mismo que entró en vigor el 26 de septiembre de 2014, siendo modificado mediante publicación en el mismo medio de difusión oficial los días 17 de

octubre del 2014, 17 de octubre de 2016 y 20 de julio de 2017, respectivamente.

- V. El 12 de enero de 2015, se publicó en el DOF el *"Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión"*.
- VI. El 8 de noviembre de 2017, se publicó en el DOF el *"Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite los Lineamientos de Consulta Pública y Análisis de Impacto Regulatorio del Instituto Federal de Telecomunicaciones"* (en lo sucesivo los "Lineamientos"). En términos de lo dispuesto por el artículo Primero Transitorio, los Lineamientos entraron en vigor el 1 de enero de 2018.
- VII. El 18 de mayo de 2018, se publicó en el DOF el *"Decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo"*. En términos de lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, esto es el 19 de mayo de 2018.

En virtud de los antecedentes señalados y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. - Competencia del Instituto. - De conformidad con el párrafo décimo quinto del artículo 28 de la Constitución, el Instituto es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la propia Carta Magna y en los términos que fijan las leyes en la materia.

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo décimo sexto del artículo 28 Constitucional, el Instituto es también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá, en forma exclusiva, las facultades que dicho precepto constitucional y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica.

Por su parte, el último párrafo del artículo 25 de la Constitución, en concatenación con los objetivos de los diversos párrafos primero, sexto y noveno, mandata que a fin de promover la competitividad como elemento habilitador de la rectoría del Estado para el desarrollo nacional integral y sustentable, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.

Es así que, la Ley General de Mejora Regulatoria (en lo sucesivo, la "Ley General") establece en su artículo 7, fracciones I, II, IV y V, como principios de la política de

mejora regulatoria, los siguientes: mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social, seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones, coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatorio nacional y simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de regulaciones, trámites y servicios.

Asimismo, de conformidad con el artículo 8, fracciones I, II, IV, V, VI, X, XI y XIV, de la disposición legal en comento, se establecen como objetivos de la política de mejora regulatoria: procurar que las regulaciones que se expidan generen beneficios superiores a los costos y produzcan el máximo bienestar para la sociedad; promover la eficacia y eficiencia de la regulación, trámites y servicios de los sujetos obligados; generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, trámites y servicios; simplificar y modernizar los trámites y servicios; fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de la gestión gubernamental; promover la participación de los sectores público, social, privado y académico en la mejora regulatoria; facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, y coadyuvar en las acciones para reducir el costo económico derivado de los requerimientos de trámites y servicios establecidos por parte de los sujetos obligados.

A mayor abundamiento, en términos de lo señalado por las fracciones XL y XLI del artículo 15, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en lo sucesivo, la "Ley"), el Instituto se encuentra facultado para formular, de considerarlo necesario, consultas públicas no vinculatorias, así como establecer disposiciones para sus procesos de mejora regulatoria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Por su parte, el artículo 51 de la Ley, dispone que cuando el Pleno del Instituto así lo determine, se realizarán consultas públicas bajo los principios de transparencia y participación ciudadana.

En específico, el Instituto, de conformidad con el inciso iv), fracción VIII, del artículo 4 del Estatuto cuenta dentro de su estructura con la Coordinación General de Mejora Regulatoria (en lo sucesivo, la "Coordinación General"), la cual tiene a su cargo el proceso de mejora regulatoria en los sectores regulados por el Instituto. De manera particular, la fracción XIV, del artículo 75 del mencionado ordenamiento, prevé que corresponderá a la citada unidad administrativa, revisar el marco regulatorio, diagnosticar su aplicación y elaborar para consideración del Pleno del Instituto, disposiciones para sus procesos de mejora regulatoria en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

En razón de lo anterior, la fracción III, del numeral Tercero de los Lineamientos, precisa la facultad del Instituto de realizar Consultas Públicas de Evaluación con la finalidad de recabar información, comentarios, opiniones, aportaciones u otros elementos de análisis por parte de cualquier persona, sobre el efecto de las regulaciones y políticas regulatorias emitidas por el Pleno del Instituto y que se encuentren vigentes, a fin de evaluar su eficacia, eficiencia, impacto y permanencia con relación a las circunstancias por las que fueron creadas.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 6o., 7o. y 28, párrafos décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 7, 15, fracciones XL y XLI, 17, fracción I, y 51 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 5, 12, fracciones X, XXII inciso g) tercer párrafo, XXX, y 138 de la Ley Federal de Competencia Económica; y 1, 4, fracción I, y 6, fracciones XXV, XXXVII y XXXVIII del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como la fracción I del numeral Primero y la fracción III del numeral Tercero de los Lineamientos de Consulta Pública y Análisis de Impacto Regulatorio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Pleno como órgano máximo de gobierno del Instituto, es competente para emitir el presente Acuerdo.

SEGUNDO. - Evaluación ex post. - El Instituto tiene a su cargo la mejora regulatoria en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión; la cual, es considerada una política pública cuyo objeto, de conformidad con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en lo sucesivo, la "OCDE") es garantizar que las normas y los marcos regulatorios se justifiquen, sean de buena calidad y adecuados para su propósito¹.

En ese tenor, diversos organismos internacionales ven en la mejora regulatoria una política que los gobiernos deben fomentar y practicar para lograr un actuar más efectivo y eficiente. Ésta, se auxilia para su implementación, entre otros, de la evaluación *ex ante* y *ex post* de las regulaciones, así como de la participación ciudadana a través de las consultas públicas en la elaboración de nuevas disposiciones de carácter general, así como las existentes, generando un vínculo proactivo entre el Gobierno y los regulados.

Al efecto, el Consejo de Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE, señaló en el año 2012, dentro de las Recomendaciones del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria, la necesidad de los Gobiernos en comprometerse al más alto nivel político con una política expresa de gobierno completo para la calidad regulatoria².

Siendo uno de los elementos fundamentales de ésta, mantener un sistema de gestión regulatoria, que incluya la evaluación de impacto *ex ante* y *ex post* como elementos fundamentales del proceso de toma de decisiones basado en evidencia. De esta manera, es necesaria la evaluación de las políticas existentes a través del análisis de impacto *ex post* con la finalidad de asegurar que las regulaciones sean efectivas y eficientes. En algunas circunstancias, los procesos

¹ OCDE, 2012, pp. 21

² OCDE, 2012, pp.6

formales de análisis de impacto *ex post* pueden ser más efectivos que el análisis *ex ante* para informar sobre el debate de políticas en curso ³

En razón de la recomendación emitida por el Consejo de Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE sobre efectuar la evaluación de la regulación vigente, como política de mejora regulatoria, es menester precisar que la evaluación *ex post* se define como la herramienta por medio de la cual, según ese organismo internacional, se lleva a cabo una revisión sistemática del inventario regulatorio para asegurar que las regulaciones se mantienen hasta la fecha, con beneficios mayores a sus costos, son consistentes y cumplen con los objetivos de política previstos⁴. Esto es, si están bien diseñadas y son aptas para el propósito por el cual fueron creadas en razón de los cambios de carácter social, económico, político o tecnológico suscitados con posterioridad a la propia emisión de las regulaciones.

Asimismo, es importante precisar que el papel que desempeña la revisión *ex post* permite complementar y renovar el ciclo de gobernanza regulatoria, además, implica la necesidad de una interpretación integral. Ello, debido a que las revisiones *ex post* tienen una simetría con las evaluaciones *ex ante* al verificar que los objetivos establecidos se han cumplido en la práctica⁵, a fin de identificar problemas aplicativos en el contexto actual de la regulación, así como impactos específicos de rendimiento y cuestiones de interés, y a su vez, implementar mejoras basadas en políticas similares.

Al respecto, la OCDE ha identificado a partir del análisis de prácticas internacionales de evaluación *ex post*, tres enfoques o aproximaciones principales a saber ⁶:

- ❖ Gestión continua: es aquel enfoque dirigido a los requisitos administrativos y plantea la utilización de métodos de compensación en la emisión de regulaciones (e.g. one-in one-out);
- ❖ Mecanismos de revisión programada: es aquel enfoque en el que la revisión se identifica y plantea con anticipación, por ejemplo, la inclusión de cláusulas de revisión en una regulación al momento de su promulgación, y
- ❖ Revisiones ad hoc: es aquel enfoque en el que las revisiones responden a una finalidad específica o involucran un inventario más amplio de regulaciones.
- ❖ La OCDE señala que este enfoque provee una oportunidad periódica para identificar áreas problemáticas actuales de sectores específicos o

³ OCDE, 2012. pp.27

⁴ OECD, 2017. pp. 3

⁵ OECD, 2017. pp. 3

⁶ OECD, 2018. pp. 2-3

de la economía en su integridad. De la misma manera, dicho organismo internacional apunta que este tipo de revisiones resulta apropiado para regímenes regulatorios que involucren complejidades e interacciones significativas y/o que son altamente contenciosos.

Al efecto, las herramientas analíticas básicas recomendadas de la evaluación *ex post* al régimen regulatorio son las siguientes y responden a cuestionamientos precisos, a saber⁷:

- ❖ Oportunidad: la revisión debe analizar como un umbral a cumplir, si se mantiene un razonamiento válido para regular;
- ❖ Efectividad: la revisión debe determinar si la regulación (o el conjunto de regulaciones) en efecto cumple los objetivos por los cuales fue creada;
- ❖ Eficiencia: la revisión debe determinar si la regulación da lugar a costos innecesarios (fuera de aquellos necesarios para alcanzar el objetivo regulatorio) u otros impactos no pretendidos, y
- ❖ Alternativas: la revisión debe considerar si es necesario modificar la regulación o reemplazarla con instrumentos alternativos.

Por su parte, el Consejo de Política y Gobernanza Regulatoria advierte la importancia de adherirse, en materia de política regulatoria, a los principios de gobierno abierto, considerando la transparencia y la participación en el proceso regulatorio a fin de asegurar que la regulación se encuentre al servicio del interés público y se consideren las necesidades legítimas de aquellos a quienes concierne y afecta. Esto conlleva a ofrecer oportunidades significativas (incluso en línea) para que el público contribuya al proceso regulatorio en todas sus etapas⁸.

Derivado de lo anterior, como parte del proceso de evaluación *ex post* de la regulación, es necesario someter a escrutinio de los interesados, a través de procesos de consulta pública, el régimen jurídico sujeto a evaluación. En este sentido, considerando que la función de la evaluación *ex post* es evaluar qué tan bien una regulación se ha ejecutado en la práctica, es importante consultar con aquellos directamente afectados⁹. De igual manera, comprometerse con la sociedad civil en general, en lo tocante a la revisión, puede ayudar a equilibrar las preocupaciones acerca de los costos con una mejor apreciación de los beneficios.

TERCERO.- Problemática.- El Instituto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, fracción VIII, inciso iv), y 75 del Estatuto, cuenta dentro de su estructura orgánica con la Coordinación General, misma que además de tener a su cargo el proceso de mejora regulatoria de este órgano constitucional autónomo, conforma

⁷ OECD, 2018, pp. 3-4

⁸ OCDE, 2012, pp. 4

⁹ OECD, 2018, pp. 23

y administra el Inventario de Trámites del Instituto (en lo sucesivo, el “Inventario”) en el portal de Internet de este ente gubernamental, el cual, contiene todos los trámites que derivan de las leyes, normas, reglas, lineamientos o disposiciones de carácter general, a cargo de las unidades administrativas de éste.

Como órgano regulador en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, así como en materia de competencia económica en dichos sectores, el Instituto emite distintas regulaciones, las cuales en la mayor parte de los casos crean trámites y que, de acuerdo a lo señalado por el artículo 3, fracción XXI de la Ley General, se entenderán como *“(c)ualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado realicen ante la autoridad competente en el ámbito federal, de las entidades federativas, municipal o de la alcaldía, ya sea para cumplir una obligación o, en general, a fin de que se emita una resolución”*.

En razón de lo anterior, con relación a la política de mejora regulatoria para los sectores de las telecomunicaciones y radiodifusión, el Instituto ha empleado algunas metodologías para conocer el impacto de los trámites que tiene a su cargo, a saber:

Modelo de Costeo Estándar

El Modelo de Costeo Estándar es una metodología empleada por la mayor parte de los países miembros de la OCDE para medir y reducir la carga administrativa de sus trámites.

En razón de ello, el Instituto ha empleado el Modelo de Costeo Estándar (en lo sucesivo, el “MCE”), que consiste en determinar qué tan gravosas son las actividades administrativas estándar¹⁰ que tiene que realizar un interesado (i.e. empresa) para dar cumplimiento a un trámite en particular, es decir, conocer la carga administrativa asociada a éste, identificando posibles áreas de oportunidad, a efecto de que posteriormente se propongan acciones y estrategias que permitan un mejor uso de los recursos.

Sin embargo, el MCE no es completo, ya que omite los costos financieros, los costos de oportunidad y el pago de derechos y aprovechamientos, que en su caso, incurre el interesado en el cumplimiento de un trámite, de igual manera no incorpora un enfoque para usuarios ni audiencias sino solamente para empresas.

¹⁰ El MCE asume las siguientes actividades estándar: i) lectura y comprensión de requisitos, ii) recolección y generación de información, iii) reuniones con personal y consultores externos, iv) llenado de formatos y reportes, v) realización de escritos, y vi) creación de archivos digitales, tiempo de espera, entre otras.

Diagramación de los procesos internos relacionados con los trámites del Instituto.

El Instituto efectuó, con el apoyo de las unidades administrativas responsables de los trámites, el mapeo y diagramación de los procesos de los trámites contenidos en su Inventario a efecto de identificar y proponer mejoras en su operación.

No obstante, al igual que el MCE, la generación de propuestas de optimización de los trámites en el proyecto de Diagramación fueron identificadas desde el interior del Instituto, sin involucrar a la población a la cual se dirigen los trámites.

En razón de lo anterior, aún y cuando el Instituto ha efectuado diversas acciones en materia de mejora regulatoria con relación a los trámites a su cargo, se considera necesario fortalecer los esfuerzos realizados para seguir mejorando su regulación a fin de garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos de interés general en los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, considerando los impactos que éstos tienen en la industria, los usuarios y las audiencias.

De esta manera, se considera de especial conveniencia centrar, en primera instancia, el proceso de revisión de la regulación, en aquella que da origen a los diversos trámites a cargo del Instituto, en razón de ser ésta la figura que constantemente se prevé en la regulación en la materia, además de constituirse como la interacción remota, constante, progresiva y proactiva con sus regulados.

Así, el someter a consulta pública los trámites contenidos en el Inventario, así como la identificación de posibles áreas de oportunidad, permitirá contar con un insumo esencial para emprender diversas acciones tendientes a la mejora continua, optimización, simplificación administrativa, mejora regulatoria e implementación de tecnologías de la información, que se refleje en un mejor aprovechamiento de recursos.

Por su parte, México desde 1994 es parte de los países miembros de la OCDE, la cual tiene como objeto promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo como es, entre otras, la política de mejora regulatoria.

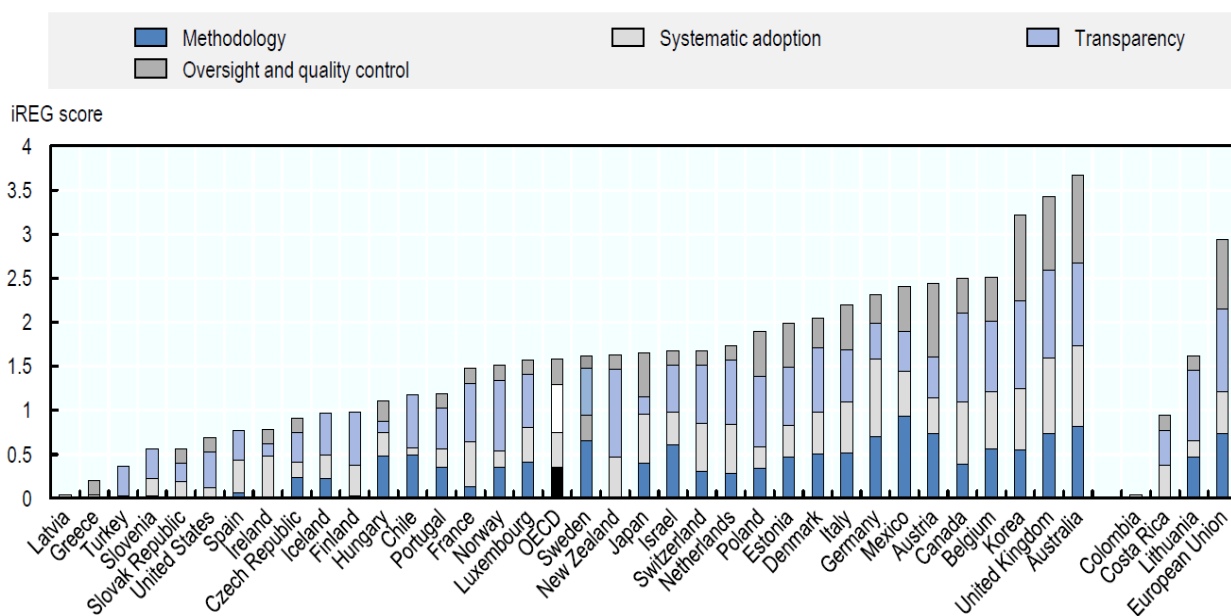
La política de mejora regulatoria, como se precisó en el Considerando Segundo, tiene por objeto establecer acciones con la finalidad de que tanto el régimen jurídico sujeto a emisión como el vigente, estén debidamente justificados, sean de buena calidad y adecuados para su propósito. En específico, la evaluación *ex post*, como mecanismo aplicable en la política de mejora regulatoria asegura que la normativa aplicable, sea efectiva y consistente.

En ese sentido, la OCDE en su *Preliminary Draft of the 2018 Regulatory Policy Outlook*, estableció cuatro indicadores para medir la práctica de evaluación *ex*

post de los países miembros, entre otras políticas de mejora regulatoria¹¹, consistentes en los siguientes:

- ❖ Adopción sistemática: registra los requisitos formales y con qué frecuencia se llevan a cabo en la práctica;
- ❖ Metodología: mide los métodos utilizados;
- ❖ Supervisión y Control de Calidad: mide el papel de los órganos de supervisión y las evaluaciones disponibles, y
- ❖ Transparencia: registra la información que refiere a los principios de gobierno abierto.

Figure 1.30. Preliminary composite indicators: Ex post evaluation for primary laws

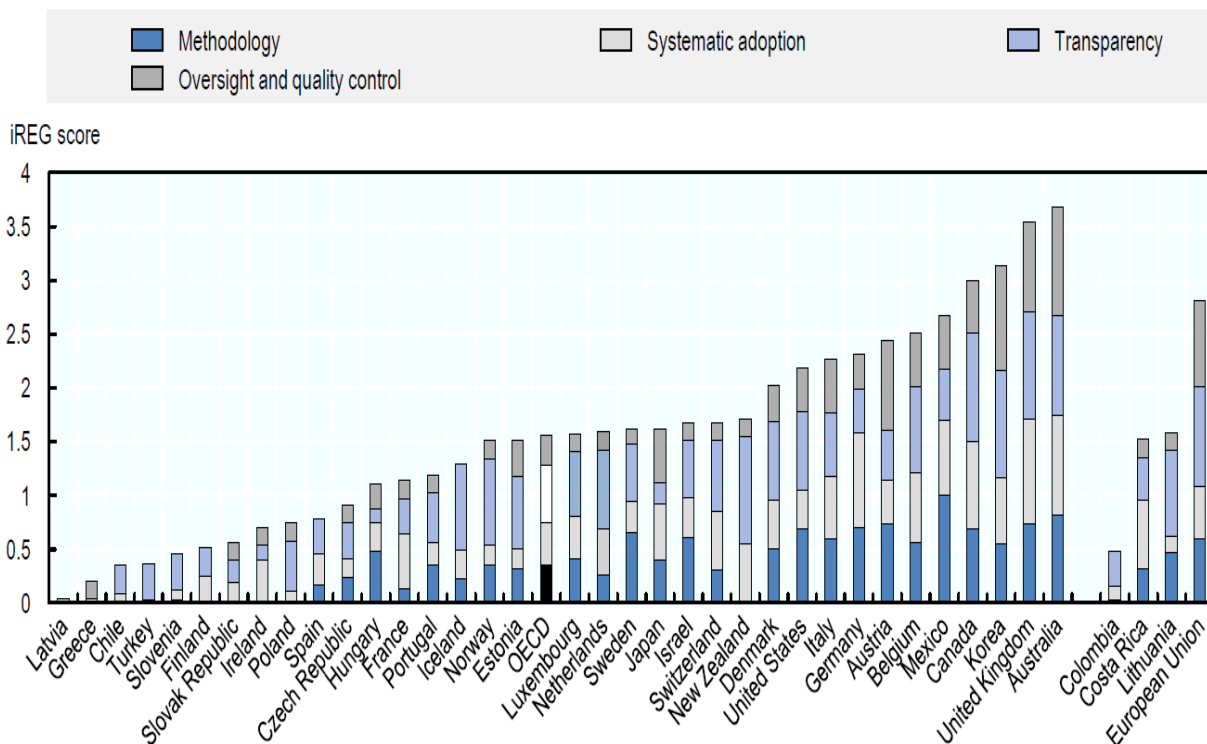


En razón de la importancia en la implementación de este proceso de mejora regulatoria, a continuación, se muestran las gráficas que reflejan los avances de los países miembros de la OCDE en materia de evaluación ex post, tanto en leyes primarias como en disposiciones reglamentarias.

Fuente: Resultados preliminares de los Indicadores para 2017 de la Encuesta de Política Regulatoria y Gobernanza (iREG) e Indicadores de la OCDE de Política Regulatoria y Gobernanza (iREG) 2015. En: Preliminary Draft of the 2018 Regulatory Policy Outlook, OECD.

¹¹ OCDE, 2018. pp.27

Figure 1.31. Preliminary composite indicators: *Ex post* evaluation for subordinate regulations



Fuente: Resultados preliminares de los Indicadores para 2017 de la Encuesta de Política Regulatoria y Gobernanza (iREG) e Indicadores de la OCDE de Política Regulatoria y Gobernanza (iREG) 2015. En: Preliminary Draft of the 2018 Regulatory Policy Outlook, OECD.

Como se advierte, México se posiciona como el país miembro de la OCDE con la mayor puntuación en el indicador correlativo a la metodología para el desarrollo de la evaluación *ex post*. No obstante, tal situación no ocurre para el caso del indicador respectivo a transparencia en dicho proceso de mejora regulatoria.

En ese sentido, la presente consulta pública se presenta como un ejercicio de transparencia en el proceso de revisión de la regulación, al involucrar a los sectores competencia del Instituto en la misma, mediante la recepción y análisis de aquellos insumos que reflejen su percepción sobre los trámites contenidos en la regulación a cargo del Instituto.

CUARTO. - Participación ciudadana. - En la multicitada Recomendación emitida por el Consejo de Política y Gobernanza Regulatoria en el año 2012, se enfatizó la importancia de adherirse a los principios de gobierno abierto, considerando la transparencia y la participación en el proceso de mejora regulatoria con la finalidad de que el público contribuya en mejorar el régimen jurídico aplicable.

En ese sentido, en el 2011 se formó la Alianza para el Gobierno Abierto (en lo sucesivo la "AGA"), conformada por 65 países, entre los cuales se encuentra México, y cuyo fin es propiciar compromisos concretos por los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza.

En particular, el gobierno abierto es definido por la OCDE, como una cultura de gobernanza centrada en el ciudadano que utiliza herramientas, políticas y prácticas innovadoras y sostenibles para promover la transparencia, la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas del gobierno a fin de fomentar la participación de los interesados en apoyo de la democracia y el crecimiento incluyente¹².

Al respecto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo, el "INAI") desarrolló, a partir de un proceso participativo y deliberativo, las bases teóricas que sustentarían las políticas de Gobierno Abierto para los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, las cuales se plasmaron en el llamado "Modelo de Gobierno Abierto del SNT", en el cual se especificó que los principios que rigen la política pública son: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación.

El principio de participación ciudadana, se define como el instrumento, prácticas y dinámicas mediante las cuales las demandas y las necesidades de la ciudadanía y de los grupos sociales pueden ser incorporadas en los procesos de diseño, decisión, implementación y evaluación de las políticas públicas¹³.

Así pues, se establecen diversos niveles o grados de participación, diferenciando los siguientes¹⁴:

- ❖ Informativo-asistencial, en donde ésta es meramente receptiva y limitada a recibir y analizar información;
- ❖ Consultiva, en donde la participación no sólo es receptiva sino propositiva al estar abierta a la valoración y presentación de propuestas, aunque no impliquen compromiso de cumplimiento;
- ❖ Decisiva, en donde la participación es activa al permitir la toma de decisiones, y
- ❖ Ejecutiva, la cual incluye la toma de decisiones, la ejecución y gestión de las mismas.

¹² OCDE, 2018. pp. 189

¹³ INAI, 2016, pp.19

¹⁴ J. Ventosa Víctor, 2016, pp.61

De esta manera, el Instituto busca cumplir con uno de los pilares fundamentales del gobierno abierto y de toda institución democrática del Estado de Derecho, alineándose de igual manera, con dos de los objetivos de la política de mejora regulatoria, según lo dispuesto en el artículo 8, fracciones VI y X de la Ley General, a saber, fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de la gestión gubernamental, y promover la participación de los sectores público, social, privado y académico en la mejora regulatoria.

Con fundamento en los artículos 6o., 7o. y 28, párrafos décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 7, 15, fracciones XL y XLI, 17, fracción I, y 51 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 5, 12, fracción X, XXII inciso g) tercer párrafo, XXX, y 138 de la Ley Federal de Competencia Económica; y 1, 4, fracción I, y 6, fracciones XXV, XXXVII y XXXVIII del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como la fracción I del numeral Primero y la fracción III del numeral Tercero de los Lineamientos de Consulta Pública y Análisis de Impacto Regulatorio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Pleno resuelve emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Se determina someter a consulta pública los trámites contenidos en las disposiciones de carácter general a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para la detección de posibles áreas de oportunidad en los mismos, conforme al **Documento de trabajo** que se adjunta como Anexo Único.

Dicha consulta pública se realizará durante un plazo de 40 (cuarenta) días hábiles, contados a partir de su publicación en el portal de Internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que dentro de ese plazo cualquier interesado presente sus comentarios o aportaciones sobre el particular, conforme a la mecánica prevista en el portal de Internet del Instituto.

SEGUNDO. - Se instruye a la Coordinación General de Mejora Regulatoria, ejecute la consulta pública materia del presente Acuerdo, incluyendo la recepción y la atención que corresponda en el ámbito de sus atribuciones, a los comentarios o aportaciones que sean vertidos a propósito del presente proceso consultivo.

TERCERO. - Publíquese en el portal de Internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

(Firmas de los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones)

El presente Acuerdo fue aprobado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XXI Sesión Ordinaria celebrada el 20 de junio de 2018, por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, María Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja, Javier Juárez Mojica, Arturo Robles Rovalo y Sóstenes Díaz González; con fundamento en los párrafos vigésimo, fracciones I y III; y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/200618/425.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LOS TRÁMITES
CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES DE
CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL INSTITUTO
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, ASÍ
COMO PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLES
ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE LOS MISMOS



Documento de Trabajo



Índice

El Instituto Federal de Telecomunicaciones y su función reguladora	3
La mejora regulatoria en el Instituto	4
La evaluación <i>ex post</i> como herramienta de la mejora regulatoria	5
¿Por qué evaluar los trámites contenidos en el Inventario de Trámites del Instituto?	8
¿Por qué realizar una consulta pública?	9
Guía orientativa para participar en la consulta pública	10
Punto de contacto	13
Referencias	14

El Instituto Federal de Telecomunicaciones y su función reguladora

El 11 de junio de 2013, mediante el "*Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones*", se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, el "Instituto"), como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, además de ser la autoridad en materia de competencia económica en los sectores de los servicios antes aludidos.

Ello, en el contexto de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión llevada a cabo en México en ese mismo año, la cual da cuenta de cómo mejores políticas públicas se pueden traducir en una vida mejor. Según señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en lo sucesivo, la "OCDE") en el "*Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones radiodifusión en México 2017*", desde 2013 esta reforma estructural ha permitido que las autoridades mexicanas pongan en marcha importantes cambios para modernizar los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, desafiando un *status quo* concentrado y dirigiéndose hacia un futuro más competitivo.

De la reforma destacan dos elementos principales. El primero es la determinación de México para enfrentar las desigualdades en el acceso a los servicios de telecomunicaciones, conllevando un empoderamiento notable de los usuarios de servicios de comunicación. El segundo elemento es la apertura de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión a una mayor competencia, que resulta en más opciones para los usuarios y crea nuevas oportunidades derivadas de la conectividad para el desarrollo económico y social (OCDE, 2017. pp. 5).

No obstante, una de las particularidades del régimen jurídico creado a partir de la reforma, es su alto grado de detalle. En el referido estudio, la OCDE señaló que, a diferencia de la mayoría de los textos constitucionales, la normatividad relativa a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, la "Constitución") es extremadamente detallada y descriptiva (OCDE, 2017. pp. 130). De esta manera, debido a que las normas constitucionales actuales son considerablemente detalladas, la legislación secundaria reitera los mandatos que las primeras establecen, y sienta las bases de un amplio espectro de obligaciones y competencias sobre las que las autoridades, habrán de regular.

Hoy, a 5 años de su creación, el Instituto ha emitido como resultado de su función reguladora, una diversidad de disposiciones jurídicas de carácter general que van

desde la gestión del espectro hasta las propias condiciones de competencia en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión, servicios mayoristas y minoristas, contenidos audiovisuales y regulación de preponderancia, por citar algunos. Ello, aunado al marco regulatorio que el Instituto *heredó* de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones.

De esta manera, si bien las disposiciones de carácter general que han sido emitidas o modificadas por el Instituto, de septiembre de 2014 a la fecha, han pasado por un proceso de mejora regulatoria, buscando generar mayores beneficios que costos de cumplimiento, lo cierto es que el Instituto enfrenta el reto y la necesidad de realizar un análisis retrospectivo sobre la oportunidad, efectividad, eficiencia y alternativas de los trámites a su cargo, a efecto de realizar las modificaciones que correspondan al marco regulatorio, para contar con regulación de calidad y apegada a los fines sociales y de interés general que persigue.

La mejora regulatoria en el Instituto

El último párrafo del artículo 25 de la Constitución, en concatenación con los objetivos de los diversos párrafos primero, sexto y noveno, mandata que a fin de promover la competitividad como elemento habilitador de la rectoría del Estado para el desarrollo nacional integral y sustentable, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.

Es así, que la Ley General de Mejora Regulatoria (en lo sucesivo, la “Ley General”) establece en su artículo 7, fracciones I, II, IV y V, como principios de la política de mejora regulatoria, los siguientes: mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social; seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones; coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatorio nacional y, simplificación mejora y no duplicidad en la emisión de regulaciones, trámites y servicios.

Asimismo, de conformidad con el artículo 8, fracciones I, II, IV, V, VI, X, XI y XIV, de la disposición legal de mérito, son objetivos de la política de mejora regulatoria: procurar que las regulaciones que se expidan generen beneficios superiores a los costos y produzcan el máximo bienestar para la sociedad; promover la eficacia y eficiencia de la regulación, trámites y servicios de los sujetos obligados; generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, trámites y servicios; simplificar y modernizar los trámites y servicios;

fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de la gestión gubernamental; promover la participación de los sectores público, social, privado y académico en la mejora regulatoria; facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, y coadyuvar en las acciones para reducir el costo económico derivado de los requerimientos de trámites y servicios establecidos por parte de los sujetos obligados.

Por su parte, en términos de lo señalado por las fracciones XL y XLI del artículo 15, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en lo sucesivo, la "Ley"), el Instituto se encuentra facultado para formular, de considerarlo necesario, consultas públicas no vinculatorias, así como establecer disposiciones para sus procesos de mejora regulatoria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Asimismo, el artículo 51 de dicha Ley, dispone que cuando el Pleno del Instituto así lo determine, se realizarán consultas públicas bajo los principios de transparencia y participación ciudadana.

En específico, el Instituto de conformidad con el inciso iv), fracción VIII, del artículo 4 del Estatuto, cuenta dentro de su estructura con la Coordinación General de Mejora Regulatoria (en lo sucesivo, la "Coordinación General"), la cual tiene a su cargo el proceso de mejora regulatoria en los sectores regulados por el Instituto. De manera particular, la fracción XIV, del artículo 75 del mencionado ordenamiento, prevé que corresponderá a la citada unidad administrativa, revisar el marco regulatorio, diagnosticar su aplicación y elaborar para consideración del Pleno del Instituto, disposiciones para sus procesos de mejora regulatoria en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

En razón de lo anterior, la fracción III, del numeral Tercero de los Lineamientos de Consulta Pública y Análisis de Impacto Regulatorio, precisa la facultad del Instituto de realizar *Consultas Públicas de Evaluación* con la finalidad de recabar información, comentarios, opiniones, aportaciones u otros elementos de análisis por parte de cualquier persona, sobre el efecto de las regulaciones y políticas regulatorias emitidas por el Pleno y que se encuentren vigentes, como es el caso de los trámites, a fin de evaluar su eficacia, eficiencia, impacto y permanencia con relación a las circunstancias por las que fueron creados.

La evaluación *ex post* como herramienta de la mejora regulatoria

El Instituto tiene a su cargo la mejora regulatoria en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, la cual, de acuerdo con la OCDE, es una política pública cuyo objeto es garantizar que las normas y los marcos regulatorios se justifiquen, sean de buena calidad y adecuados para su propósito (OCDE, 2012. pp. 21).

En ese tenor, diversos organismos internacionales ven en la mejora regulatoria una política que los gobiernos deben fomentar y practicar para lograr un actuar más efectivo y eficiente. Ésta, se auxilia para su implementación, entre otros, de la evaluación *ex ante* y la evaluación *ex post*, así como de la participación ciudadana a través de las consultas públicas para la elaboración de nuevas regulaciones y emitiendo opiniones de las regulaciones vigentes, generando un vínculo proactivo entre el Gobierno y los regulados.

Al efecto, el Consejo de Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE, señaló en 2012, dentro de la Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria, la necesidad de los Gobiernos de efectuar revisiones sistemáticas de programas de acervo normativo importante contra objetivos de políticas claramente definidos, incluso considerando los costos y beneficios, para asegurar que las regulaciones se mantengan actualizadas, el costo se justifique, sean rentables y coherentes, y cumplan con los objetivos previstos en materia de política pública (OCDE, 2012. pp.6-19).

Asimismo, es importante precisar que el papel que desempeña la revisión *ex post* permite complementar y renovar el ciclo de gobernanza regulatoria, además, implica la necesidad de una interpretación integral. Ello, debido a que las revisiones *ex post* tienen una simetría con las evaluaciones *ex ante* al verificar que los objetivos establecidos se han cumplido en la práctica (OECD, 2017. p. 3), a fin de identificar problemas aplicativos en el contexto actual de la regulación, así como impactos específicos de rendimiento y cuestiones de interés y, a su vez, implementar mejoras basadas en políticas similares.

Al respecto, la OCDE ha identificado, a partir del análisis de prácticas internacionales de evaluación *ex post*, tres enfoques o aproximaciones principales, a saber (OECD, 2018. pp. 2-3):

- ❖ *Gestión continua*: es aquel enfoque dirigido a los requisitos administrativos y plantea la utilización de métodos de compensación en la emisión de regulaciones (e.g. *one-in one-out*);
- ❖ *Mecanismos de revisión programada*: es aquel enfoque en el que la revisión se identifica y plantea con anticipación, por ejemplo, la inclusión de cláusulas de revisión en una regulación al momento de su promulgación, y
- ❖ *Revisiones ad hoc*: es aquel enfoque en el que las revisiones responden a una finalidad específica o involucran un inventario más amplio de regulaciones.

La OCDE señala que este enfoque provee una oportunidad periódica para identificar áreas problemáticas actuales de sectores específicos o de la economía en su integridad. De la misma manera, dicho organismo internacional apunta que este tipo de revisiones resulta apropiado para regímenes regulatorios que involucran complejidades e interacciones significativas y/o que son altamente contenciosos.

Al efecto, las herramientas analíticas básicas recomendadas de la evaluación *ex post* al régimen regulatorio son las siguientes y responden a cuestionamientos precisos, a saber (OECD, 2018, pp. 3-4):

- ❖ *Oportunidad*: la revisión debe analizar como un umbral a cumplir, si se mantiene un razonamiento válido para regular;
- ❖ *Efectividad*: la revisión debe determinar si la regulación (o el conjunto de regulaciones) en efecto cumple los objetivos por los cuales fue creada;
- ❖ *Eficiencia*: la revisión debe determinar si la regulación da lugar a costos innecesarios (fuera de aquellos necesarios para alcanzar el objetivo regulatorio) u otros impactos no pretendidos, y
- ❖ *Alternativas*: la revisión debe considerar si es necesario modificar la regulación o reemplazarla con instrumentos alternativos.

Por su parte, el Consejo de Política y Gobernanza Regulatoria advierte la importancia de adherirse, en materia de política regulatoria, a los principios de gobierno abierto, considerando la transparencia y la participación en el proceso regulatorio a fin de asegurar que la regulación se encuentre al servicio del interés público y se consideren las necesidades legítimas de aquellos a quienes concierne y afecta. Esto conlleva a ofrecer oportunidades significativas (incluso en línea) para que el público contribuya al proceso regulatorio en todas sus etapas (OCDE, 2012, pp. 4).

Derivado de lo anterior, como parte del proceso de evaluación *ex post* de la regulación, es necesario someter a escrutinio de los interesados, a través de procesos de consulta pública, el régimen jurídico sujeto a evaluación. En este sentido, considerando que la función de la evaluación *ex post* es evaluar qué tan bien una regulación se ha ejecutado en la práctica, es importante consultar con aquellos directamente afectados (OECD, 2018, pp. 23). De igual manera, comprometerse con la sociedad civil en general, en lo tocante a la revisión, puede

ayudar a equilibrar las preocupaciones acerca de los costos con una mejor apreciación de los beneficios.

¿Por qué evaluar los trámites contenidos en el Inventario de Trámites del Instituto?

La Coordinación General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, fracción VIII, inciso iv), y 75 del Estatuto, además de tener a su cargo el proceso de mejora regulatoria de este órgano constitucional autónomo, conforma y administra el Inventario de Trámites del Instituto (en lo sucesivo, el "Inventario"), el cual contiene todos los trámites que derivan de las leyes, normas, reglas, lineamientos o disposiciones de carácter general a su cargo.

Como órgano regulador en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, así como en materia de competencia económica en dichos sectores, el Instituto al emitir regulación crea trámites, los cuales en términos del artículo 3, fracción XXI, de la Ley General, se entenderá por *"(c)ualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado realicen ante la autoridad competente en el ámbito federal, de las entidades federativas, municipal o de la alcaldía, ya sea para cumplir una obligación o, en general, a fin de que se emita una resolución"*.

En razón de lo anterior, con relación a la política de mejora regulatoria para los sectores de las telecomunicaciones y radiodifusión, el Instituto ha empleado algunas metodologías para conocer el impacto de los trámites que tiene a su cargo. A saber, el Modelo de Costeo Estándar, empleado por la OCDE, y la diagramación de los procesos internos relacionados con los trámites del Instituto.

No obstante, aún y cuando el Instituto ha efectuado diversas acciones en materia de mejora regulatoria con relación a los trámites a su cargo, se considera necesario fortalecer los esfuerzos para seguir mejorando su regulación a fin de garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos de interés general en los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, considerando los impactos que éstos tienen en la industria, los usuarios y las audiencias.

De esta manera, se considera de especial conveniencia centrar, en primera instancia, el proceso de revisión de la regulación, en aquella que da origen a los diversos trámites a cargo del Instituto, en razón de ser ésta la figura que constantemente se prevé en la regulación para asegurar su cumplimiento, además de constituirse como la interacción remota, constante, progresiva y proactiva con sus regulados.

¿Por qué realizar una consulta pública?

El someter a consulta pública los trámites que se desprenden de la regulación emitida por el Instituto, contenidos en el Inventario, permitirá la identificación de posibles áreas de oportunidad, así como contar con un insumo esencial para emprender diversas acciones tendientes a la mejora continua, optimización, simplificación administrativa, mejora regulatoria e implementación de tecnologías de la información, que se refleje en un mejor aprovechamiento de recursos.

En ese sentido, la presente consulta pública se presenta como un ejercicio de transparencia en el proceso de revisión de la regulación, a través de los trámites que ésta crea, al involucrar a los sectores competencia del Instituto, mediante la recepción y análisis de aquellos insumos que reflejen su percepción sobre el entorno regulatorio del Instituto.

En la multicitada Recomendación emitida por el Consejo de Política y Gobernanza Regulatoria en 2012, se enfatizó la importancia de adherirse a los principios de gobierno abierto, considerando la transparencia y la participación en el proceso de mejora regulatoria con la finalidad de que el público contribuya en mejorar el régimen jurídico aplicable.

En particular, el gobierno abierto es definido por la OCDE, como una cultura de gobernanza centrada en el ciudadano que utiliza herramientas, políticas y prácticas innovadoras y sostenibles para promover la transparencia, la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas del gobierno a fin de fomentar la participación de los interesados en apoyo de la democracia y el crecimiento incluyente (OCDE, 2018. pp. 189).

Al respecto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo, el "INAI") desarrolló, a partir de un proceso participativo y deliberativo, las bases teóricas que sustentarían las políticas de gobierno abierto para los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, las cuales se plasmaron en el llamado "Modelo de Gobierno Abierto del SNT", en el cual se especificó que los principios que rigen la política pública son: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación.

El principio de participación ciudadana, se define como el instrumento, prácticas y dinámicas mediante las cuales las demandas y las necesidades de la ciudadanía y de los grupos sociales pueden ser incorporadas en los procesos de diseño, decisión, implementación y evaluación de las políticas públicas (INAI, 2016, pp.19).

Así pues, se establecen diversos niveles o grados de participación, diferenciando los siguientes (J. Ventosa Víctor, 2016, pp.61):

- ❖ Informativo-asistencial, en donde ésta es meramente receptiva y limitada a recibir y analizar información;
- ❖ Consultiva, en donde la participación no sólo es receptiva sino propositiva al estar abierta a la valoración y presentación de propuestas, aunque no impliquen compromiso de cumplimiento;
- ❖ Decisiva, en donde la participación es activa al permitir la toma de decisiones, y
- ❖ Ejecutiva, la cual incluye la toma de decisiones, la ejecución y gestión de las mismas.

De esta manera, el Instituto busca cumplir con uno de los pilares fundamentales del gobierno abierto y de toda institución democrática del Estado de Derecho, alineándose de igual manera, con dos de los objetivos de la política de mejora regulatoria, según lo dispuesto en el artículo 8, fracciones VI y X de la Ley General, a saber, fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de la gestión gubernamental, y promover la participación de los sectores público, social, privado y académico en la mejora regulatoria.

Guía orientativa para participar en la consulta pública

A fin de que los interesados puedan participar en el presente proceso consultivo, el Instituto pone a su disposición el "Formato para participar en la Consulta Pública"; el cual se encuentra disponible en la misma dirección de Internet del presente Documento de Trabajo, a efecto de que el mismo sea contestado y remitido al Instituto conforme a lo señalado en la descripción de la mecánica del presente proceso consultivo; o bien, mediante escrito libre que sea presentado en la Oficialía de Partes Común del Instituto ubicada en Insurgentes Sur 1143, colonia Nochebuena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México, el horario de recepción será en los días hábiles de lunes a jueves de las 9:00 a las 18:30 horas y los viernes de las 9:00 a las 15:00 horas.

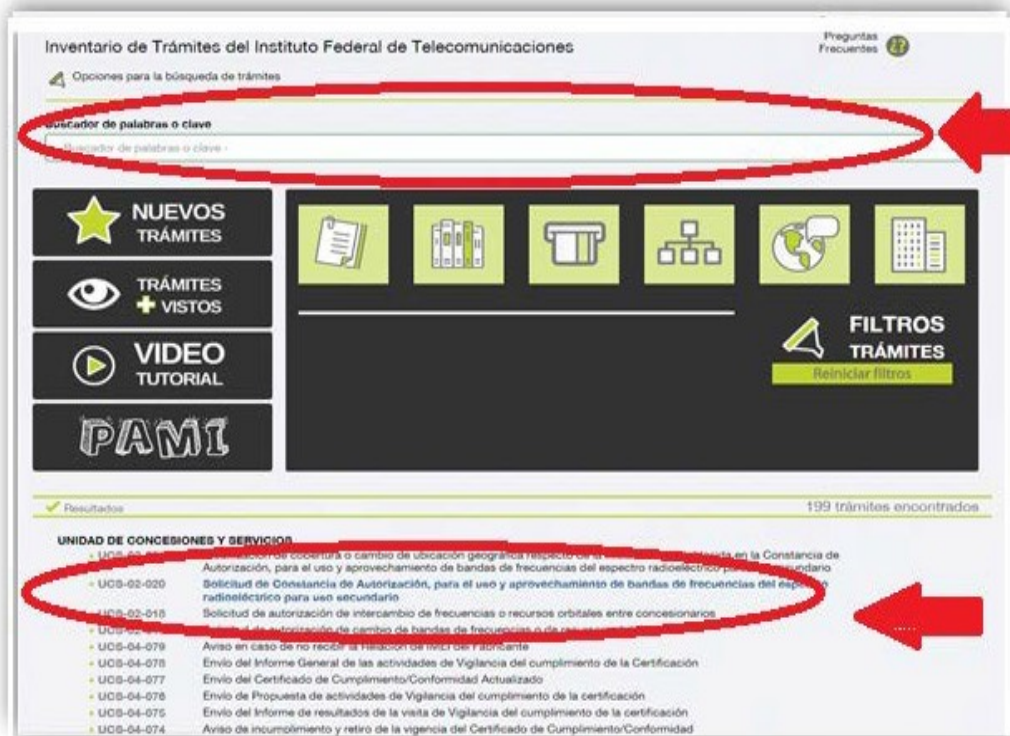
Se precisa que, de conformidad con lo señalado en el "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba su calendario anual de sesiones ordinarias y el calendario anual de labores para el año 2018 y principios de 2019", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2017, en los periodos comprendidos del 16 al 20 y del 23 al 27 de julio, se suspenderán labores en el Instituto, además de los sábados y domingos, al ser considerados días inhábiles por dicho Acuerdo.

De esta manera, los comentarios, opiniones y aportaciones recibidos en días inhábiles serán registrados en el Instituto a partir del día siguiente hábil de su recepción.

El formato de mérito cuenta con 3 apartados sustantivos en los que los interesados podrán plasmar sus opiniones, comentarios y aportaciones a propósito del presente proceso consultivo, de conformidad con lo siguiente:

a) **Comentarios, opiniones y aportaciones específicas del participante sobre los trámites contenidos en el Inventario:**

Para consultar los trámites contenidos en las disposiciones de carácter general a cargo del Instituto, es necesario ingresar al apartado del sitio de Internet del Instituto denominado "Inventario de Trámites", ubicado en la siguiente dirección electrónica <http://www.ift.org.mx/tramites>, como se observa en la siguiente imagen:



Una vez ubicado el trámite de su interés, el sitio de Internet le dirigirá a la Cédula de información del mismo, la cual contiene diversa información de utilidad para los regulados del Instituto a fin de dotarles de la suficiente información para cumplir con sus obligaciones, así como para el ejercicio pleno de sus derechos, entre la que destaca, el fundamento jurídico que da origen al trámite, los casos en los que debe o puede realizarse el trámite, los medios por los cuales puede realizarse éste, el tipo de resolución, respuesta o decisión que puede obtenerse al concluir el trámite y su vigencia, el monto de las contraprestaciones, derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho monto y el fundamento jurídico que da origen a éstos, como se muestra en la siguiente imagen:

Modificación de cobertura o cambio de ubicación geográfica respecto de la inicialmente establecida en la Constancia de Autorización, para el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso secundario

Folio: UCS-02-021

Preguntas

Cédula de Información del Trámite

— Fundamento jurídico que le da origen

Artículo 11 de los Lineamientos para el otorgamiento de la Constancia de Autorización, para el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso secundario, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2018.

— Casos en los que debe o puede realizarse el trámite

¿Quién?

Personas físicas o morales titulares de una Constancia de Autorización, para el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso secundario, que cuente con vigencia.

¿Cuándo o en qué casos?

Cuando se desee modificar la cobertura o cambiar de ubicación geográfica la red de radiocomunicación referida en una Constancia de Autorización, para uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso secundario.

— Medios por los cuales puede realizarse el trámite

Escrito en formato libre, presentado ante la Oficialía de Partes Común del Instituto Federal de Telecomunicaciones, dirigido a la Unidad de Concesiones y Servicios.

Fundamento jurídico.

A este respecto, los interesados podrán proporcionarle al Instituto sus comentarios, opiniones y aportaciones que tengan a propósito de cada uno de los trámites contenidos en su Inventario y que resulten de su especial interés, conforme a los criterios de oportunidad, efectividad, eficiencia y alternativas. Para tal efecto, los interesados deberán emplear los medios de presentación previstos en la mecánica de la consulta y, primordialmente, en la sección II del “Formato para participar en la Consulta Pública”.

- b) **Comentarios, opiniones y aportaciones específicas del participante sobre los trámites que las disposiciones jurídicas vigentes prevén y que no se encuentran contenidos en el Inventario:**

Tomando en consideración la definición del término de "trámite" prevista en la Ley General, los interesados podrán proporcionarle al Instituto sus comentarios, opiniones y aportaciones que tengan a propósito de los trámites que contengan las disposiciones jurídicas de carácter general vigentes y que no se encuentren contenidos en el Inventario. Para lo anterior, los interesados deberán emplear los medios de presentación previstos en la mecánica de la consulta y, primordialmente, en la sección III del "Formato para participar en la Consulta Pública".

- c) **Comentarios, opiniones y aportaciones generales del participante sobre el asunto en consulta pública:**

Finalmente, los interesados podrán proporcionarle al Instituto sus comentarios, opiniones y aportaciones que tengan a propósito de la presente consulta pública de manera general y que no encuadren en los rubros anteriores. Para tal efecto, los interesados deberán emplear los medios de presentación previstos en la mecánica de la consulta y, primordialmente, en la sección IV del "Formato para participar en la Consulta Pública".

Punto de contacto

Para cualquier duda, comentario o inquietud sobre el presente proceso consultivo, el Instituto pone a su disposición el siguiente punto de contacto: Alejandra Martínez Morales, Directora de Seguimiento de la Coordinación General de Mejora Regulatoria, correo electrónico: alejandra.martinez@ift.org.mx o bien, a través del número telefónico (55) 50154000, extensión 4478.

Referencias

Alianza Para el Gobierno Abierto. Recuperado el 23 de mayo de 2018, de: <http://gobabiertomx.org/alianza-internacional/>

Comité de Política Regulatoria de la OCDE. (2012). "Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria". OCDE. Recuperado el 18 de mayo de 2018, de: <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20with%20cover%20SP.pdf>

INAI. (2016). "Modelo de Gobierno Abierto. Documento teórico". INAI. México. Recuperado el 18 de mayo de 2018, de:

<http://inicio.inai.org.mx/SiteCollectionDocuments/Transparencia/Modelo%20de%20Gobierno%20Abierto/Modelo%20Te%C3%B3rico%20de%20Gobierno%20Abierto.pdf>

J. Ventosa Víctor. (2018). "Didáctica de la participación: Teoría, Metodología y Práctica". España. 2016. Recuperado el 23 de mayo de 2018, de:

https://books.google.com.mx/books?id=noG9DAAAQBAJ&pg=PA61&lpg=PA61&dq=informaci%C3%B3n,+consultativa,+participaci%C3%B3n+propositiva+y+decisiva&source=bl&ots=4j_h7kXlsx&sig=fZ7kMOABLcEnM4CFKH0I4zRH-ZA&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKewi6wqLO-ZzbAhUmgK0KHZduDCgQ6AEIKjAA#v=onepage&q=informaci%C3%B3n%2C%20consultativa%2C%20participaci%C3%B3n%20propositiva%20y%20decisiva&f=false

OCDE. (2012). "Prácticas internacionales de evaluación ex post". Recuperado el 18 de mayo de 2018, de: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/la-evaluacion-de-leyes-y-regulaciones/practicas-internacionales-de-evaluacion-ex-post_9789264176362-3-es#page1

OCDE. (2012). "Revisiones de la OCDE sobre Reforma Regulatoria. México: Hacia una perspectiva de gobierno entero para la mejora regulatoria. Informe de las principales conclusiones". Recuperado el 18 de mayo de 2018, de:

[https://www.oecd.org/centrodemexico/OCDE%20\(2012\)%20Revisiones%20de%20reforma%20regulatoria%20de%20Mexico%20-%20resultados.pdf](https://www.oecd.org/centrodemexico/OCDE%20(2012)%20Revisiones%20de%20reforma%20regulatoria%20de%20Mexico%20-%20resultados.pdf)

OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017, Éditions OCDE, París. Recuperado el 30 de mayo de: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264280656-es>

OECD. (2017). "Reviewing the stock of regulations – Towards best practice principles and methods: A Scoping Paper", 17th Meeting of the Regulatory Policy Meeting, Paris. Paris.

OCDE/CAF/CEPAL. (2018). "Perspectivas económicas de América Latina 2018: Repensando las instituciones para el desarrollo". OCDE. París. Recuperado el 23 de mayo de 2018, de: <http://dx.doi.org/10.1787/leo-2018-es>

Regulatory Policy Committee of the OECD. (2018). "Preliminary Draft of the 2018 Regulatory Policy Outlook", 18th Session of the Regulatory Policy Committee, Paris.

Regulatory Policy Committee of the OECD. (2018) "Reviewing the stock of regulation- towards best practice principals and methods: a Scoping Paper". 18th Session of the Regulatory Policy Committee, Paris.

